

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
30 de abril
de 2020

Año XXXVII
N° 1.591

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrerapo@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

Crecen las luchas
y las protestas
obreras



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINÚA

1º DE MAYO



QUE LA CRISIS LA PAGUEN

LOS CAPITALISTAS

POR UN SALIDA DE LOS TRABAJADORES EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO

Acto internacionalista

del **FRENTE DE
IZQUIERDA** **UNIDAD**
Y DE TRABAJADORES

Seguilo por  Prensa Obrera

Transmisión en vivo desde las 16:15hs.
con saludos internacionales y referentes
del movimiento obrero clasista

17 HORAS, HABLAN

Romina Del Plá (PO) | Celeste Fierro (MST)

Juan Carlos Giordano (IS) | Nicolás Del Caño (PTS)

Mienten: el pacto CGT-UIA-gobierno es al 60% del salario

Por abajo, se extiende un reguero de luchas

Se ha caído el operativo maquillaje a la política del Presidente. Hasta ahora, su decreto establecía (establece) el pago integral del salario al trabajador en cuarentena o licenciado por ser de riesgo. Ahora, el pacto firmado por su gobierno con la UIA y la CGT habilita una fuerte rebaja salarial para abril y mayo, que todo hace pensar será renovable, según se renueve la cuarentena. Por la burocracia sindical firmaron Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Antonio Caló y Carlos Acuña. El primero, del enorme gremio de la sanidad, firma esto en lugar de estar defendiendo los reclamos de sus trabajadores, que se extienden como reguero de pólvora en los centros de salud. El segundo es estatal, señal de alarma para los millones de trabajadores que revistan en el Estado.

Han puesto como condición que no haya despidos en esas empresas, pero ya sabemos el nivel de incumplimiento que tiene esto.

La rebaja, presentada como del 25%, es mucho mayor. Porque el acuerdo habilita el pago del 75% "del salario neto". Esto quiere decir que la rebaja se aplica después de descuentos, por lo que lo pactado resulta en un 60% del salario de convenio.

Tras la firma del pacto, se empezaron a suceder los acuerdos de grandes gremios en esa línea. Comercio firmó exactamente en ese importe. Gastronómicos va firmando por ramas en el mismo porcentaje al igual que la Uocra. La UOM firmó por el 70%, pero con la particularidad de que incluye en la rebaja a las embarazadas, enfermos y mayores de 60 licenciados, violando a la baja el decreto inicial de la cuarentena.

Igualmente, el último acuerdo antisalarial firmado antes de este pacto vergonzoso es todavía peor: la burocracia textil arregló sumas no remunerativas de 17.000 a 20.000 pesos por todo concepto. Las obreras de Textilana en Mar del Plata ganaron la calle ante la delegación marplatense del ministerio y en Trelew se produjo una manifestación de masas a partir de los cuaderos de delegados textiles, contra lo firmado por el sindicato (ver páginas centrales).

El movimiento obrero argentino está siendo empujado a dejar de cobrar un salario para cobrar un "ingreso de emergencia". Es para los trabajadores con cuarentena, pero en la mayoría de las industrias que han arrancado se producen

rotaciones de turnos reducidos, con lo cual todos sufren rebajas. Por otro lado, las patronales con anuencia de la burocracia, producen "según pedidos" y "multifuncionalizan" tareas, el paraíso de la reforma laboral aprovechando el coronavirus.

Pero el ataque al salario es más vasto.

Si miramos el Observatorio de los trabajadores en *PrensaObrera.com*, veremos que son decenas las empresas que directamente interrumpen el pago. En Ramón Chozas, antigua empresa gráfica, que está trabajando ilegalmente bajo amenaza de despido porque sus tareas no son esenciales, la patronal anunció que a fin de mes no pagará los salarios. Como en todos los casos, con la vista gorda de las autoridades del ministerio y la complicidad de la Federación Gráfica, a nivel delegados y a nivel Comisión Directiva (miembro activo de la Corriente Federal kirchnerista). En estas páginas hemos denunciado que los obreros petroleros en la Patagonia son suspendidos masivamente hasta con el 20/30% del salario real de bolsillo que venían cobrando.

En otros casos se operan las rebajas con o sin acuerdo sindical de hasta el 70% del salario. Pero hay que aclarar que los acuerdos son todos homologados de inmediato. Como en la época de Cavallo, se están bajando los salarios nominales, cuando el decreto presidencial inicial de la cuarentena estableció que se pagaran los salarios "integralmente". Se borra con el codo literalmente lo que se escribe con la mano, bajo fuego de la presión patronal. Techint, que ganó el

primer round, gana ya por puntos la pelea. Sus rebajas salariales se aplican a todos, además de la homologación de sus despidos. En sus plantas siderúrgicas, se trabaja "just in time" con la excusa de la pandemia, convocando a trabajar según necesidades.

Pero las rebajas son más profundas. Las cláusulas gatillo previamente establecidas en los acuerdos paritarios previos a la pandemia han sido anuladas (provincia de Neuquén, docentes universitarios, etc.) y reemplazadas según arbitrio del poder. Tampoco son respetadas las cláusulas de revisión previstas para estos meses: las reuniones con sindicatos son para bajar salarios con motivo del aislamiento social preventivo obligatorio, no para actualizar salarios.

Como se observa, hasta nuevo aviso se acabaron las paritarias. Pero si la emergencia sanitaria justifica que no haya paritarias, sin embargo, no se ha detenido la inflación, aún en medio de una caída económica sin precedentes. Marzo arrojó el 3,3% general y el 3,9% de aumento en alimentos. Esto significa que se rebajan los salarios y se suspenden las paritarias, mientras continúa una inflación al ritmo del 40/50% anual. A la rebaja nominal se adiciona la rebaja del poder adquisitivo de esos importes nominales.

Con todo, la rebaja no termina en estos rubros. Es aún mayor porque se ha eliminado virtualmente la parte diferida del salario -o sea, los aportes jubilatorios a la Anses. Como hemos explicado tantas veces, la jubilación no es una "pensión estatal", sino un salario que debe pagar la patronal y que en

lugar de ir al bolsillo del trabajador va a la Anses, para que ese trabajador y todos los trabajadores del país cobren la jubilación al fin de la vida activa. Pues bien, de ese salario diferido se descuenta el 95%, según los decretos presidenciales, de manera que la Anses, en este dramático momento de los adultos mayores, está siendo vaciada. Por este motivo y por otro más: los subsidios dispuestos para sostener la mitad del salario por parte del Estado provendrán de los fondos de la Anses.

La clase obrera empieza a intervenir por abajo

Conocen la explosividad de esta situación. Por eso emitieron días atrás el decreto que dispone que el Estado asume el pago de la mitad de la nómina de los salarios efectivamente cobrados en febrero. Pero tampoco se cumple.

Sobre 450.000 empresas anotadas, habilitaron la viabilidad del subsidio a 180.000 y hasta 800 trabajadores. Ocurre que piden que la facturación nominal haya caído respecto de la que la empresa solicitante tuvo hace doce meses, con un 50% de inflación de por medio. Entonces, las empresas no califican, porque además facturaron hasta el 20 de marzo. Ergo, no pagan, rebajan o despiden.

Indudablemente, el ministro Martín Guzmán y Fernández pisan la pelota para contener el déficit fiscal imparable, debido a la caída de la recaudación y el parate económico. Pero han seguido emitiendo para pagar la deuda, y tampoco han nacionalizado la banca ni los depósitos bancarios para que sean dispuestos para

afrontar la emergencia. Mucho menos han abierto los libros y cuentas de las empresas para examinar sus verdaderas cuentas y tenencias societarias y personales para evaluar la capacidad de pago a sus trabajadores.

Todo el poder personal que ha acumulado Fernández, sin Congreso ni Justicia funcionando, con toda la burocracia sindical arrodillada y la oposición capitalista desmoronada y disciplinada, no existe a la hora de garantizar salarios y puestos de trabajo. Sus decretos son palabras que no se cumplen. Y, como se aprecia, pueden ser desconocidos por un nuevo decreto. No rige más la integralidad de los salarios en la cuarentena.

El gobierno de Kicillof no mueve un dedo para reabrir la planta de la patronal superexplotadora ante la gran lucha de los obreros del frigorífico Penta. Solo reprimieron brutalmente primero y enviaron la Gendarmería después para impedir el paso de los compañeros en el Puente Pueyrredón. Se vio también presta a la Policía de la Ciudad para llevar presos a los delegados del subte, cuando denunciaron condiciones de contagio en sus trenes. Y en Neuquén desplegaron la Gendarmería contra los mineros de Andacollo, solo que en este caso los mineros transpusieron los retenes y llegaron donde se proponían con su reclamo, mostrando que cada vez más sectores salen a la lucha.

Varios frigoríficos están en lucha, hay un paro de médicos en Santa Fe y los compañeros de BedTime ocupan la planta ante el no pago y la amenaza de despidos. Lo mismo en los centros de salud con asambleas y comisiones de reclamo desde la base de sus gremios.

La burocracia sindical no tiene mandato para entregar el salario y los puestos de trabajo. Lo peor está por venir. Los trabajadores tenemos que tomar nuestra defensa en manos propias. Ningún despido, salario integral, control obrero de esencialidad de las actividades durante la cuarentena, apertura de los libros al control de los trabajadores, respeto irrestricto de los protocolos sanitarios, actualización de salarios y jubilaciones según inflación. Que la crisis la paguen los capitalistas. No pago de la deuda, impuesto a las grandes rentas y fortunas.

Néstor Pitrola

MOVIMIENTO PIQUETERO

Con hambre no hay cuarentena: si no hay respuestas, ¡nos movilizamos!

El Polo Obrero ha anunciado, a través de un comunicado, que en los próximos días realizará una movilización en demanda de alimentos, el pago inmediato del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) sin exclusiones y la entrega de elementos sanitarios y de higiene, en el marco de la pandemia.

En medio de una enorme demanda social, los comedores no están recibiendo los alimentos que necesitan. Recordemos que

a comienzos de mes se destapó un escándalo de sobreprecios de hasta el 200% en la compra de alimentos. Más de 20 días después de aquellos hechos, denuncia el Polo, "el Ministerio [de Desarrollo Social] no ha resuelto un problema elemental, como el de los comedores populares, que desbordan de demandas," acentuadas por los despidos masivos, suspensiones y recortes salariales que están imponiendo las patronales.

Respecto al IFE, el Polo denuncia que aún "casi nadie lo ha cobrado y una gran cantidad de beneficiarios lo cobrarán recién en junio". Además, más de 4 millones de personas fueron excluidas del cobro.

"Sin alimentos y sin ingresos, el gobierno apuesta al 'control social' que, en los barrios populares, ejerce con mano dura la policía de Berni y la Gendarmería de Frederic," denuncia el comunicado.



Crecen las luchas y las protestas obreras

Más que nunca “que la crisis la paguen los capitalistas”

MIGUEL BRAVETTI

La cuarentena ha ingresado a nueva fase. No solo por la liberación parcial del aislamiento -por zonas y cantidad de habitantes- sino por un salto en la cantidad de luchas y acciones callejeras: la caravana de mineros neuquinos de Andacollo hasta la Casa de Gobierno provincial, donde confluyó con el Polo Obrero y otras organizaciones y los docentes de Aten; la protesta de las obreras de Textilana y la marcha de textiles en Trelew; los conflictos de varios frigoríficos (Penta, Federal, Lobos); los cortes de calles y abrazos a hospitales en la Ciudad de Buenos Aires; el paro de médicos de Santa Fe; la ocupación de la plástica BedTime; el paro de los repartidores, entre muchas otras.

La “normalidad” que reclaman los capitalistas viene acompañada de la “normalidad” de la lucha de los trabajadores, que crecerán por el agravamiento del derrumbe económico. Una encuesta del Centro de Economía Regional y Experimental arrojó que “en abril, el 80% de las familias no logró cubrir sus gastos con ingresos propios y se endeudó. El endeudamiento global llegó a los 1,7 billones; un promedio 150 mil pesos por hogar”.

Todo cruje

Detrás de la imagen de control que intenta proyectar Alberto Fernández en sus apariciones televisivas, todo cruje.

El recule con las salidas recreativas luego del rechazo de cuatro gobernadores -que emitieron un comunicado conjunto; entre ellos Axel Kicillof y Horacio Larretas es la expresión de desinteligencia cuando la curva de contagios se empieza a acelerar. Los casos crecientes en la Villa 31 y en el conurbano, los altísimos porcentajes de infectados entre el personal de la salud, lo ocurrido en varios geriátricos y la situación en las cárceles son los puntos más críticos de un cuadro gran explosividad.

La fragilidad del sistema sanitario es enorme. El tiempo ganado con el aislamiento no redundó en una mejora. La cantidad de camas de terapia intensiva, respiradores y tests sigue siendo exigua. Y los insumos de bio-seguridad y Equipos de Protección Personal (EPP) en los hospitales son un bien escaso. Esa fue la denuncia principal del aplausazo en puertas y halls de centros de salud dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace unos días.

Fernández nada dijo sobre el necesario aumento de las partidas presupuestarias para afrontar el salto en la pandemia, que el propio gobierno admite que se avecina. Tampoco hizo referencia a ninguna medida de asistencia a los millones de trabajadores que se enfrentan al dilema de querer preservar su salud sin los recursos mínimos para hacerlo.

El Ingreso Familiar de Emergencia, dispuesto para los trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías, se cobra escalonado; arrancando recién ahora se extenderá hasta julio, por lo cual los mismos 10 mil pesos comprometidos terminan cubriendo no un mes sino tres. Por la acción de diversos filtros formales, cuatro millones de trabajadores fueron excluidos y, contra algunos trascendidos, el gobierno informó que “no está previsto un nuevo desembolso”.

Los compañeros del Polo Obrero junto a numerosas organizaciones sociales denuncian que son centenares los comedores y merenderos que no reciben alimentos, en algunos casos, desde hace meses. Las denuncias por sobrepagos (que se siguen sumando) han paralizado al Ministerio de Desarrollo Social, en una combinación de corrupción, inoperancia y dilaciones. La responsabilidad del Estado y sus funcionarios por esta situación es, formalmente, criminal.

El universo de ocupados y semiocupados enfrenta una ola de despidos, suspensiones y recortes salariales, que abarca a todas las actividades. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), entre el 15 de marzo y el 15 de abril, había 310 mil trabajadores afectados. En ese lapso, el Ministerio de Trabajo homologó convenios de 150 acuerdos “a la baja”.

La UIA, la CGT y el gobierno

El reciente acuerdo firmado por la CGT y la UIA, que será refrendado por el gobierno mediante un nuevo DNU u otro mecanismo, que establece un marco para suspensiones por 60 días al 75% de salario neto (rondaría el 60% del salario de convenio), ha reimpulsado las negociaciones por gremio: Comercio, Smata, textiles, petroleros, UOM... Aunque en algunos casos, como textiles y petroleros, la rebaja es mucho mayor, y en el “submundo de la precarización” que reina en pequeñas y microempresas, ni hablar.

Este “acuerdo marco” fue exigido por las patronales como complemento del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que dispone el pago del 50% de los salarios por parte de la Anses. Mediante sucesivas presiones, la UIA logró imponer modificaciones a las restricciones del DNU y ahora reclama “que todas las fábricas del país puedan tener acceso” a esos fondos, independientemente de su tamaño o situación productiva.

Según Héctor Daer, el acuerdo “significa un puntapié clave para cuando podamos salir de la cuarentena y se tenga que retomar la actividad económica” ya que “tiene la posibilidad de ser prorrogado”. Y agregó, “De esto se sale con un gran acuerdo político y social”. Pasado en limpio: que los ac-

tuales recortes de salarios, despidos y cambios en los procesos y formas de trabajo se conviertan en permanentes.

Detrás de esta reestructuración se alinean todos. La determinación de Clarín (una de las empresas que más está ganando en esta crisis por el crecimiento de los servicios de cable y telefonía) de incorporarse a la lista de los “pagadores en cuotas” tiene ese significado.

La recaudación, en lo que va de abril, se desplomó un 25% interanual en términos reales, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Esto se replica hacia abajo y coloca en la mira los salarios estatales -nacionales provinciales y municipales. El congelamiento salarial incluido en la ley de Emergencia de Rodríguez Larreta, en una proyección inflacionaria que no baja del 50%, significa otra forma de reducción salarial.

Todos hacen sus negocios

El otro blanco de las quejas de la UIA son los bancos y las “dificultades en el acceso al crédito -en particular para el capital de trabajo- y los cheques rechazados”. El primer plan, consistente en la liberación de encajes bancarios para dirigir esos recursos a préstamos a tasas bajas, fracasó por la desconfianza de los bancos en la capacidad de repago de las empresas y la resistencia de las patronales a endeudarse en las condiciones ofrecidas. Los pesos liberados terminaron generando la corrida que llevó al blue a las nubes.

Los chispazos entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, por los niveles de emisión continuaron con esta discusión sobre el rol que debe jugar la banca en estos momentos. Los trascendidos sobre medidas como la reforma de la carta orgánica del Banco Central, para “obligar” a los bancos a prestar más plata o un impuesto específico, han dado paso a la posibilidad de emitir “un bono en pesos que se entregaría a los bancos a cuenta de los encajes” -es decir que los bancos harían su negocio, financiando al Tesoro, para que éste distribuya esos fondos a tasas subsidiadas.

La deuda y el Mercosur

La cuestión clave sigue siendo la deuda. La propuesta del gobierno cayó bien entre los especuladores -pese a los rechazos “para la tribuna” de algunos de los comités que agrupan a los bonistas-, ya que la quita en el capital es mínima y la tasa de interés promedio que se propone pagar por los 22 bonos en discusión es mayor que la tasa promedio internacional. Lo que determinaría que el “valor presente” de los nuevos bonos sería bastante más alto que la cotización de los actuales.

Por otro lado, quienes piden mayores pagos a los acreedores externos lo hacen

en defensa de su propio bolsillo porque, mediante los fondos de inversión, una parte sustancial de esa deuda tiene como beneficiarios finales a residentes argentinos. Ese es el secreto de la formación de activos en el exterior. “Un buen acuerdo de deuda para nuestro futuro post pandemia”, dice el comunicado firmado por un grupo de empresarios de diversas industrias, que respalda la negociación encarada por el gobierno.

Es claro que la marcha de la crisis agudizará los choques entre los distintos sectores, incluso a escala continental, como lo demuestra la crisis desatada en torno del Mercosur. La oposición del gobierno argentino a los acuerdos de apertura económica bilateral con Corea del Sur, Japón y otros sería apoyada por la UIA y rechazada por el capital agrario, dado que los privaría de contar con las ventajas que le otorgaría la suscripción de un convenio con aquellos países para acceder a sus mercados. Un “proteccionismo” fiscalista conversado con el FMI. Es, en todo caso, un episodio del dislocamiento del Mercosur, ya moribundo. Testimonio, si los hay, de la impotencia de las burguesías nacionales para unir la América Latina semicolonial.

Impulsar a fondo la intervención de los trabajadores

Nuestra primera tarea es apoyar e impulsar cada uno de los reclamos y luchas en curso y los que surjan. La defensa del salario debe partir del rechazo al acuerdo de la UIA, la CGT y el gobierno, y la adopción de mecanismos de ajuste automático por inflación. Se impone la defensa de los convenios ante el avance del teletrabajo o la virtualización educativa, que constituyen una verdadera “reforma laboral de hecho”. La lucha contra el hambre pasa por la universalización de un seguro de 30 mil pesos para todo aquel que carezca de un ingreso y la asistencia alimentaria bajo el control de las organizaciones populares.

Los conflictos son un campo de choque con las patronales y con la burocracia, que requieren un pliego específico en conexión estrecha con un programa general, que plantee medidas de fondo como la centralización de todo el sistema de salud o la nacionalización de la banca. Los mandatos a los cuerpos de delegados, la elección de comisiones fabriles y de lucha, la batalla por la apertura de cuentas de las empresas que despiden o rebajan salario para establecer su continuidad bajo gestión obrera y la ocupación de esas plantas para imponerlos, como manifestaciones, paros y movilizaciones por todos los reclamos, estarán a la orden del día.

En síntesis: un programa y una acción para “que la crisis la paguen los capitalistas” y abramos paso a una salida de los trabajadores.



Romina Del Plá presente en la fábrica BedTime ocupada por sus trabajadores

La diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad y secretaria general del Suteba La Matanza se hizo presente esta mañana en la fábrica de colchones BedTime ubicada en la localidad de Ricardo Rojas del distrito de Tigre, para brindar el apoyo a sus trabajadores, que decidieron ocupar la planta en respuesta a la decisión patronal de no pagar los salarios de marzo y abril, y despedir al 50% de los trabajadores de la empresa.

La es general y se ha intensificado en las últimas semanas, la dirección del sindicato de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (Uoyep) no llama a ningún tipo de medida de lucha ni asamblea. Además, se rechazó el pacto firmado por el gobierno de Fernández con la UIA y la CGT que habilita una fuerte rebaja salarial a todas las empresas.

Romina les planteó a los trabajadores que el gobierno nacional, en lugar de permitir las suspensiones, hacer caso omiso a los despidos y pactar el recorte salarial, debería obligar a las empresas a abrir sus libros, analizar sus ganancias acumuladas y garantizar los puestos de trabajo. Destacó la importancia de lo votado en asamblea por los trabajadores para que la producción de la fábrica se ponga enteramente a disposición de las necesidades que crea la lucha contra la pandemia, como la producción de colchones para hospitales y el abastecimiento de todo el sistema de salud, y remarcó que el control obrero de la producción es fundamental en esta etapa porque es la herramienta para garantizar las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, como se está haciendo en BedTime, desde que los trabajadores permanecen en la fábrica.

Romina Del Plá se comprometió a realizar un proyecto de declaración para presentar en el Congreso Nacional y colaborar así con la difusión del conflicto y a hacer un aporte de la bancada del PO-FIT al fondo de lucha, poniendo a disposición todas las fuerzas militantes y políticas del Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista por la victoria de los trabajadores de BedTime.

Gonzalo Domínguez Pose

Textiles reaccionan en defensa del salario

Movilización en Mar del Plata convocada por trabajadores de Textilana

El lunes 27 se movilizaron los trabajadores de Textilana frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo, organizados por la Comisión Interna, para rechazar el acuerdo entre la burocracia sindical (AOT) y la cámara empresarial (Fita) que implica un recorte del 50% del salario de los trabajadores suspendidos por la cuarentena y exigir al Ministerio de Trabajo que no lo homologue. Se entregó un petitorio en estos términos, que tuvieron que recibirlo gracias a la movilización. Si bien algunas trabajadoras no pudieron llegar por los controles policiales en los colectivos, la medida contó con la presencia de más de 30 compañeros. Luego la Comisión Interna se presentó en la sede del sindicato para presentarle una copia del petitorio. La medida fue reflejada por una decena de medios locales, televisivos, radiales y portales de internet.



Lo cierto es que Textilana, lejos de estar en crisis, ha aprovechado la pandemia y la cuarentena para atacar derechos laborales y seguir vendiendo on-line el stock que tenía. Además, se encuentra produciendo barbijos para la venta.

Este ataque al salario se lleva a cabo en virtud de la habilitación que dio el gobierno nacional en el decreto de prohibición de despidos y suspensiones, que dejó expresamente establecido la vigencia del art. 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, a través del

cuales las empresas pueden negociar estas rebajas salariales con las burocracias sindicales; es el propio gobierno el que impulsa rebajas salariales. La maniobra consiste en dividir a los trabajadores que están trabajando como consecuencia de las excepciones a la cuarentena de los que no lo están, ya que el brutal recorte se aplica a estos últimos.

Luego de la denuncia de la Comisión Interna, el presidente de la cámara local de empresarios textiles declaró que "no están en condiciones de pagar el 100% de los salarios" y que "si no apoyan a las empresas en momentos de crisis, es muy difícil seguir adelante" (El marplatense, 27/4). Sería chistoso si no fuera por la brutalidad de la explotación que sufren los trabajadores en condiciones normales. En el caso de Textilana, se trata de una empresa que históricamente ha sido subsidiada por el Estado a través de la quita o eximición de aportes patronales.

Por su parte, los dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT) se han convertido en voceros empresariales. Sin mandato para firmar semejante reducción laboral, han desfilado por los medios con el mismo argumento de la crisis del sector como consecuencia del coronavirus.

Se olvidan de la miseria salarial cuando no había cuarentena. Pero, además, las empresas siguen vendiendo en forma on-line. Por eso es fundamental que se abran los libros de las empresas y que clarifiquen sus ganancias. No se puede permitir que descarguen la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Los trabajadores se empezaron a organizar frente a este atropello. Los textiles de Trelew se movilizaron masivamente para reclamar contra este atropello (ver nota).

La clase obrera empieza a intervenir. Los trabajadores tenemos que tomar nuestra defensa en manos propias. Ningún despido, salario integral, control obrero de esencialidad de las actividades durante la cuarentena, apertura de los libros al control de los trabajadores, respeto irrestricto de los protocolos sanitarios, actualización de salarios y jubilaciones según inflación. Que la crisis la paguen los capitalistas. No pago de la deuda, impuesto a las grandes rentas y fortunas.

Pablo González Lopardo

Chubut: marcha contra la rebaja salarial

Una importante movilización de trabajadores textiles tuvo lugar por las calles de Trelew en repudio del acuerdo entre la Asociación Obrera Textil (AOT) y la Federación de Industrias Textiles (Fita), que con la excusa de "salvaguardar los puestos de trabajo" firmaron un acuerdo que implica la reducción de haberes en 50%. Los trabajadores también exigen la normalización de las actividades. Un delegado manifestó: "por más que rija el aislamiento obligatorio, si no nos manifestamos no podemos hacer nada", frente a esta decisión del gremio que generó mucha bronca en Trelew.



El repudio en la rebaja de los ya magros salarios de los textiles rompió la restricción de circulación imparta por el gobierno provincial. "La situación es insostenible", afirmaron los trabajadores. El grueso de la movilización estuvo comprendida por los delegados de las empresas textiles y laneras del Parque Industrial de Tre-

lew, que comenzaron la movilización en la sede de la Asociación Obrera Textil (AOT), sin el acompañamiento

de Sergio Cárdenas, secretario adjunto, conducción que ya tiene un largo historial de entrega de luchas y dejar

Federico Navarro

Neuquén: caravana minera en defensa de los salarios

Los mineros de Andacollo, en lucha ante los incumplimientos salariales por parte de la empresa Trident SA, arribaron este miércoles a la capital neuquina en una caravana, con el objetivo de instalarse frente a la Casa de Gobierno, hasta que los reciba el mandatario Omar Gutiérrez. La patronal adeuda sueldos de marzo, aportes jubilatorios y a la obra social desde 2019.



Los mineros debieron pasar por encima el cerco de Gendarmería y policial en Chos Malal, donde fueron recibidos con aplausos y vítores por la población, hicieron un alto a la salida de esta localidad y alrededor de la una de la mañana reemprendieron la marcha. Las medidas han incluido cortes de ruta y la toma del municipio de Andacollo.

parte de la Fiscalía, que el martes inició una causa penal de oficio contra la oposición docente que estuvo el jueves pasado reclamando, se desmorona como un castillo de arena frente a la férrea y decidida actitud de obreros y organizaciones piqueteras.

No fue un exabrupto que la dirigencia, de la lista TEP de Aten (a nivel nacional, Lista Celeste de Ctera), pusiera en su momento los recursos e instalaciones del sindicato al servicio incondicional de los Comités de Emergencia creados por el gobierno y la policía, que son los verdaderos estados mayores de todo el operativo represivo.

Llegaron a la capital en un día crucial, donde además de ellos, a las diez de la mañana el Polo Obrero, FOL, CTEP y otras organizaciones estuvieron también en las puertas de la Casa de Gobierno, reclamando por la ayuda social que no llega a las barriadas ni a los merenderos.

Pero la presión contra los que reclaman para que la cuarentena no implique más miseria y ajuste no solo proviene de los organismos del Estado como la Fiscalía y las fuerzas represivas. El martes, en Andacollo, antes que los mineros partieran, el Comité de Crisis les advirtió que estaban violando la legislación penal y eran pasibles de sanciones. Al coro antiobrero se sumó la dirigencia de Aten que, en sendos comunicados, "desautorizó" la movida del miércoles y llamó "irresponsable" a la Multicolor.

Por su parte, la oposición de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten), nucleada en la lista Multicolor, llegó un rato después, movilizada junto a las y los docentes que no han cobrado sus haberes.

Llamamos a todos los trabajadores a acompañar la lucha de los mineros de Andacollo, que se desenvuelve en momentos en que el gobierno, la CGT y la UIA han anudado un acuerdo que autoriza las rebajas salariales.

El intento de regimentación de

Frente al ataque al salario, defendamos la organización obrera.

Corresponsal

Policía neuquina mantuvo secuestrados a dos militantes del PO

Grave ataque en Chos Malal

En la noche del martes 28, luego que Fede y Tamara, militantes del Partido Obrero, llevaran su apoyo a la caravana de los mineros de Andacollo, cuando pasaron por la localidad -como hizo gran parte de los vecinos- fueron detenidos en un operativo direccionado desde dos móviles y más de diez policías, y pasaron la noche incomunicados hasta que fueron liberados en la mañana del miércoles 29.



Se les negó durante más de doce horas cualquier comunicación y tampoco se avisó a sus familiares. Fue un verdadero secuestro policial, y una acción represiva e intimidatoria direccionada contra el PO, por su apoyo decidido a la lucha de los mineros. La solidaridad que expresaron Fede y Tamara al paso de la caravana minera fue registrada en un video publicado por Prensa Obrera.com.

ciudad, como parte de una jornada provincial.

El ataque intimidatorio e ilegal de la policía se suma a otros operativos perpetrados contra la militancia partidaria, como ocurrió en Zapala, y que intenta la Fiscalía en Neuquén. Este secuestro demuestra que el gobierno se vale de la cuarentena y el aislamiento social como un pretexto para imponer un virtual estado de sitio.

Además, el Polo Obrero de Chos Malal había hecho público que organizaba para ese miércoles una olla popular en una barriada de la

Corresponsal

Alberto Fernández cede al chantaje de los banqueros

Nuevo plan en carpeta

Transcurrido un mes, el paquete de medidas económicas del gobierno, que fuera anunciado en los albores de la cuarentena, está haciendo aguas. Apenas un sector reducido de empresas -que se calcula en un 20%- ha logrado acceder a un préstamo por parte de los bancos. Hay una coincidencia en señalar que las instituciones financieras tienen trabadas la aprobación de las solicitudes de crédito. En lugar de ello, la enorme emisión monetaria ha ido a parar al dólar, que es lo que explica su aumento exponencial en pocas semanas. El gobierno ha terminado financiando la fuga de capitales, favoreciendo esta gran bicicleta financiera -un fracaso rotundo de un gobierno, una de cuyas promesas principales era que iba a encender los motores de la producción y poner fin a la especulación. Habría que agregar, para ser justos, que una parte similar o mayor de la emisión fue utilizada para pagar la deuda, en particular la deuda en pesos. Solamente en marzo, el Estado gatilló 140 mil millones de pesos por ese concepto y, de conjunto, desde que asumió el mandato, pagó la friolera de 14.000 millones de dólares.

Lo cierto es que la emisión ha disparado una corrida cambiaria y, como consecuencia de ella, ha provocado un salto en las presiones devaluatorias y en la carestía. Se trata de una verdadera bola de nieve, que bien podría terminar en un estallido hiperinflacionario.

Nuevas medidas

Frente a este panorama, la Casa Rosada estaría preparando un nuevo plan. El gobierno ofrecerá bonos a los bancos para financiar parte del gasto sin aumentar la emisión. La idea sería cerrar el grifo y desactivar la bomba de tiempo que representa la rienda suelta a la maquineta de impresión de billetes y al mismo tiempo sortear el escollo que interponen los bancos para volcar créditos al sector productivo.

La resistencia de la banca a prestar tiene su explicación. El BCRA armó un esquema para que desarmen una parte de sus inversiones en Letras de Liquidez (Leliq) para fondear esos préstamos. Naturalmente, para las instituciones financieras es más seguro y redituable prestarle al BCRA que a los privados, cuya cobrabilidad es dudosa e incierta, aunque el Estado haya planteado que va a salir a oficiar de garante de los créditos. El gobierno pretende sortear este chantaje ofreciendo títulos del Tesoro atractivos, que rendirían unos puntos por encima de la inflación. Basta tener presente que los cálculos más prudentes ya hablan de una inflación del 50% y hay consultoras que la ubican en 60%. Paradójicamente, mientras se habla de que la deuda es impagable y de proceder a quitas a la misma, el gobierno aquí reevalúa la deuda y crea otra nueva. Por otra parte, la vara que se aplica es absolutamente desigual: en tanto el poder adquisitivo de los salarios y las remuneraciones de las capas medias van a sufrir en el próximo período una erosión brutal y hasta un recorte de los ingresos nominales, la patria financiera, que viene sacando el dinero con palas, amasando utilidades extraordinarias, va a gozar del beneficio de una indexación acorde con la inflación y encima unos puntos adicionales. Si alguien tenía una duda, el relato nac & pop sobre la "justicia distributiva" queda por el suelo. La recompensa es aún más generosa si tenemos presente que este beneficio va a ser extensivo a los encajes (o sea, los fondos de reserva que los bancos están obligados a mantener inmovilizados en el Banco Central para hacer frente a las demandas de los ahorristas). Dichos encajes pasarían a estar remunerados con un 50% o más cuando en la actualidad no devengan ningún interés. Por otra parte, ese exce-

dente de pesos que va a quedar liberado con las nueva normativa, va a terminar echando más combustible al actual espiral inflacionario en desarrollo

Para hacer más creíble la oferta, el equipo económico, con el visto bueno de Alberto Fernández, habría decidido no reestructurar y pagar los bonos en pesos para dar una señal amistosa al mercado local. A fin de abril hay vencimientos de Boncer y Lecap por 47.040 millones, y el 21 de junio se deberá pagar 148.417 millones del bono Botapo -o "Bono del Tesoro a Tasa de Política Monetaria"-, emitido en tiempos de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda. Otra contradicción flagrante que muestra el laberinto en que está sumergido el gobierno, pues mientras señala que no está en condiciones de seguir pagando la deuda y plantea la necesidad de una reestructuración global, pega un volantazo y pasa a pagar los vencimientos en pesos cuando semanas atrás venía reperfilando los pagos que había que afrontar. Los 200.000 millones de pesos permitirían pagar 30.000 pesos a los 11 millones de anotados en el subsidio de emergencia establecido, quienes van a recibir apenas 10.000 pesos y una parte numerosa ni siquiera lo ha cobrado.

Crisis bancaria en potencia

Estamos ante una nueva concesión de Alberto Fernández, que concluyó adaptándose al chantaje de los bancos. Esto es tremendamente instructivo, pues releva las fuertes tendencias de esta nueva tentativa nac & pop a un compromiso con las patronales y al capital internacional que se verifica, ahora, en medio de la pandemia, en la tendencia a ceder a las presiones de las empresas por retomar la producción en actividades no esenciales, las rebajas salariales, los despidos y suspensiones, que vienen pasando por encima y desconociendo la prohibición



establecida en la materia por el gobierno. Y también está presente en la reestructuración en marcha de la deuda en legislación extranjera. *Página/12* -que, como es sabido, comulga con el oficialismo- destaca: "Fuentes del mercado aseguran que algunos inversores empiezan a considerar que un acuerdo entre el equipo económico y los bonistas es más probable. A los valores actuales, los bonos siguen arrojando una importante ganancia en caso de concretarse la oferta presentada hace dos semanas por el Ministerio de Economía" (26/4). Aunque Martín Guzmán lo niega, los bonistas esperan que a último momento haya un "endulzante" en la oferta. De acuerdo con los trascendidos, los bancos que asesoran al gobierno, Bank of America y HSBC, colaboran en el diálogo de Economía con los acreedores privados para llegar a un acuerdo el próximo mes. Esto es lo que explica que en las recientes jornadas, haya habido un repunte de las cotizaciones de los títulos públicos argentinos, tanto en dólares como en pesos.

La zanahoria que tiró el gobierno, sin embargo, muy probablemente no sea suficiente para tentar a los bancos. Si obligaran a las instituciones financieras a cambiar la liquidez que cuentan en la actualidad por títulos del Estado, se generaría una situación muy vulnerable. Los depósitos de los ahorristas tendrían como contrapartida bonos al borde del default y cuya capacidad de repago, por lo tanto, está cuestionada. Se rompería así la norma que, desde 2001, se puso en práctica en colocar un límite a la tenencia

de papeles públicos a los bancos y preservar sus márgenes de liquidez para hacer frente a los retiros de depósitos que pudiera generarse. Se recrearían las condiciones que a principios del milenio desembocaron en el corralito. El remedio que se propone, podría terminar siendo peor que la enfermedad. La corrida cambiaría, con un dólar que ya alcanza los umbrales de 120 pesos, podría transformarse en una corrida bancaria, reproduciendo el escenario que atravesamos en 2001. Esto está en la base de la caída de las acciones de los bancos en los últimos días.

El atolladero de la política oficial pone de relieve las limitaciones insalvables de esta nueva experiencia nacionalista. La expectativa de lograr un entendimiento amigable y una conciliación de intereses con la patria financiera es infundada e inviable. En lugar de ceder a la extorsión de los banqueros, hay que proceder a la nacionalización del sistema financiero. La creación de una banca única bajo la dirección del Estado permitiría poner fin a la fuga de capitales y colocar el ahorro nacional al servicio de una repuesta general, capaz de enfrentar la actual catástrofe sanitaria, económica y social. Esto excede el horizonte del gobierno de Alberto Fernández. Una planificación y uso racional de los recursos más urgente que nunca forma parte de un programa de reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, tarea que está reservada a los trabajadores.

Pablo Heller



Suscribite a **Prensa Obrera.com**

BRASIL

Fuera Bolsonaro-Mourão y el régimen corrupto

La crisis política brasileña dio un salto con la renuncia del “superministro” de Justicia, Sergio Moro, el viernes pasado. En una conferencia de prensa final, quien dirigió la operación judicial *Lava Jato* (y el encarcelamiento de Lula) acusó al presidente Bolsonaro de querer copar la Policía Federal para bloquear investigaciones en su contra. La Corte Suprema (Supremo Tribunal Federal -STF) ordenó investigar las imputaciones que hizo el exministro. Si esa investigación progresa, y el Congreso habilita su desarrollo, Bolsonaro podría ser destituido.

Ya hay más de veinte solicitudes de *impeachment* (juicio político) en el Congreso. Uno de los jueces del STF, Celso de Mello, instó al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del partido Demócratas), a pronunciarse sobre uno de esos pedidos. La habilitación de Maia es necesaria para abrir el juicio político. En ese caso, la situación de Bolsonaro sería casi irremontable, dado que sólo cuenta con un puñado de congresistas propios.

Por su parte, Bolsonaro lanzó medidas aventureras, alentando la vía de un autogolpe: una concentración -con su presencia, frente al Estado Mayor del Ejército en Brasilia- planteando la disolución del Congreso, aunque fue un fracaso en materia de asistencia.

Además de la “vía judicial” y el *impeachment*, apuntemos la variante de una renuncia por parte del primer mandatario. En esos casos, asumiría la presidencia el actual vicepresidente, el general (retirado) Hamilton Mourão.

El excandidato presidencial del PT, Fernando Haddad, firmó (junto a los excandidatos del centroizquierdista Psol y del PDT, entre otros) un documento que también exige la renuncia. Lula se pronunció en un reportaje por la apertura del *impeachment* a Bolsonaro, aunque su partido aún no ha presentado un pedido en la Cámara.

El Presidente ha denunciado que existe un complot en su contra para destituirlo, integrado por sectores de la Justicia, del Congreso y los gobernadores de Río y San Pablo. En las últimas semanas corrieron rumores sobre reuniones del alto mando con el vice, de cara a un potencial relevo de Bolsonaro, y otras versiones que indicaban que había sido apartado del manejo de la pandemia, a expensas del jefe de Gabinete, el general Walter Braga Netto. Las fuerzas



armadas juegan un rol determinante en la crisis.

La crisis política brasileña se desenvuelve, así, en medio de amenazas de golpes y autogolpes.

La crisis económica y sanitaria divide al gobierno

La partida de Moro coincide con el punto más álgido de la crisis social y económica. La línea anti-cuarentena de Bolsonaro, así como las cuarentenas limitadas de gobernadores opositores, han llevado al país a un desastre, cuya mayor expresión son las fosas comunes en el cementerio de Manaus, capital del estado de Amazonas. El lobby patronal ha logrado la autorización para que funcionen todo tipo de actividades no esenciales, para recortar salarios, para aplicar suspensiones masivas, pero eso no ha detenido la crisis económica. Una encuesta de la Confederación Nacional de la Industria señala la preocupación empresaria por la caída de la demanda, el aumento de la capacidad ociosa y el impacto devastador de la crisis en sectores como textiles y calzado. Habla de una “profunda insatisfacción con la situación financiera [acceso a créditos, etc.] y el margen de lucro operacional de sus negocios” (*Agencia Brasil*, 28/4). El real se ha devaluado un 40% en lo que va del año y el país volvería a caer en recesión.

En este escenario, el “ala militar” del gobierno, caracterizada como “desarrollista”, promueve un plan (“pro-Brasil”) de inversiones públicas y subsidios por 27 mil millones de dólares, en la línea de rescates al capital que están impulsando los principales Estados del mundo. Lo anunció en una conferencia de prensa el general y jefe de Gabinete, Walter Braga Netto, pero en

contra de la voluntad del ministro de Hacienda, el ultraliberal Paulo Guedes, quien defiende una línea de privatizaciones masivas, recorte del gasto público y ajuste fiscal, y ni siquiera asistió a la conferencia. Por eso, surgieron versiones de su posible renuncia al cargo. Entre tanto, Guedes fue ‘refrendado’ provisoriamente por el alto mando militar y el gabinete de Bolsonaro como una tregua para no acelerar una crisis y desplome del régimen.

La salida de Moro y las tensiones con Guedes son los capítulos más explosivos de la crisis en un conglomerado que reúne en su seno a un frente heterogéneo: la camarilla fascistoide de Bolsonaro, una poderosa “ala militar” con más de una decena de ministros, dos “superministros” de vínculo directo con el imperialismo (Moro y Guedes) y sectores del agronegocio y el evangelismo.

Esta heterogeneidad condicionó fuertemente a Bolsonaro a lo largo de su mandato, quien había llegado al poder bajo la promesa de un alineamiento con Trump y el imperialismo yanqui. La presión de su vice, Hamilton Mourão y de los exportadores agropecuarios procuró un mayor equilibrio, evitando una ruptura de los vínculos con China, transformado en el principal socio comercial de Brasil.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea, suscripto por Bolsonaro y Macri, también desató internas. Mientras el sector agrícola lo apoya con entusiasmo, un sector de la burguesía industrial le teme como a su propia tumba. Este mismo sector puso el grito en el cielo ante el planteo de Guedes de reducir el arancel externo común del Mercosur en un 50%.

Estas contradicciones limitaron a Bolsonaro, quien no pudo imponer

sus pretensiones semibonapartistas y fascizantes. Para lograrlo, por otro lado, hubiese tenido que asestar previamente un golpe decisivo a las masas. Es cierto que propinó golpes muy severos, como la reforma previsional, y que la agenda de ataques y reformas antiobreras -capitaneada por Guedes- fue lo que más o menos unificó a las distintas fracciones de la burguesía en un apoyo a su gobierno. Pero las masas mostraron su beligerancia desde el primer día: el *Ele Não*, la rebelión educativa, las 2 millones de personas que repudiaron la persecución al colectivo LGBTI y grandes huelgas como la de los petroleros contra los despidos y la privatización. Estos sectores han sufrido golpes, pero no han sido quebrados.

Independencia política

Frente a la crisis, el PT pone el centro de su acción en el terreno institucional, sea el Parlamento o las presentaciones ante la Corte. La central obrera (CUT) emitió un documento que llama al Congreso a “asumir el protagonismo”. Pero ese Congreso es el mismo que destituyó a Dilma Rousseff, fue el protagonista del *Mensalão*, del *Lava Jato* y tantos otros escándalos de corrupción. Fue el que dictó la reforma laboral antiobrera y la previsional reaccionaria. El Poder Judicial no está menos corrompido.

La lucha por echar a Bolsonaro tiene que tener como protagonista al movimiento obrero y popular. Debemos alertar fuertemente, al mismo tiempo, sobre el relevo patronal y militar que se insinúa detrás del vice. Los que le bajan el pulgar a Bolsonaro pero conspiran para que lo reemplace su vice, quieren dejar en pie todo el andamiaje de las reformas laborales y previsio-

nales antiobreras y de ataques contra las masas.

Tanto el PT, como el centroizquierdista Psol y el PCdoB plantean la constitución de un frente amplio democrático, un nuevo frente popular donde las masas se subordinan detrás de liderazgos burgueses. La CUT se ha entregado por completo a esta orientación.

Para este 1° de Mayo, las once centrales obreras de Brasil habían convocado a un acto público ‘independiente’ desde el punto de vista formal. La mayoría de estas centrales, sin embargo, se negaron a que figurara la consigna “Fuera Bolsonaro”, agitada cada vez más (cacerolazos, etc.) por amplios sectores obreros y de clase media.

Pero, ‘repentinamente’, la CUT invitó a ser parte del acto (vía streaming) a referentes clave de los partidos patronales, instigadores, en su momento, del golpe contra Dilma, como el ex presidente Henrique Cardoso, el presidente de la Cámara de diputados Rodrigo Maia y otros. Más que nunca, está planteado que la CUT y las centrales obreras rompan con la burguesía y con la política de colaboración de clases que vienen llevando adelante y se lance un plan de lucha organizando la huelga general.

La pequeña central Conlutas ha denunciado la desnaturalización del acto, se ha bajado de la convocatoria propatronal y ha convocado a un acto independiente (virtual) con la consigna “Fuera Bolsonaro-Mourão Ja”.

Es necesario impulsar la organización y movilización independiente de los trabajadores. La consigna “Fuera Bolsonaro, Mourão y el régimen corrupto” apunta no solo a la caída de Bolsonaro, sino que sale al cruce contra las alternativas antiobreras que se están barajando para sucederlo. La lucha por una Asamblea Constituyente soberana aparece como un planteo político transicional para centralizar las luchas en desarrollo, y barrer con todo el régimen y poner fin a todos los avances reaccionarios, empezando por la anulación de las reformas antiobreras laboral y previsional, satisfacer las necesidades populares y proceder a una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. No será este Parlamento reaccionario cómplice el que convoque una Constituyente soberana.

Gustavo Montenegro

Declaración del FIT-U por el Día Internacional de los Trabajadores

(...) La pandemia que azota a la humanidad en pleno siglo XXI ha puesto de manifiesto la incompatibilidad del sistema capitalista y sus intereses en base al lucro y a la ganancia privada con la preservación de la salud de los pueblos de todo el mundo. La política de vaciamiento de los sistemas sanitarios públicos, llevada a cabo por todos los gobiernos, ha sido una constante, no solo en los países semicoloniales sino también en las mecas del capitalismo mundial. Este proceso se ha intensificado sensiblemente luego de la crisis mundial capitalista de 2007/08, cuando los gobiernos volcaron todos sus recursos al rescate de los bancos, multinacionales y capitales en quiebra. Como consecuencia de eso se han magnificado los estragos de la propagación del coronavirus a escala planetaria (...)

En un mundo atravesado por "guerras" comerciales y monetarias, el desembarco de la pandemia redundó en un salto cualitativo y en una aceleración de la crisis capitalista mundial, crisis que ya se venía gestando desde tiempo atrás (...)

En nuestro país, las patronales presionan por un levantamiento total de la cuarentena en busca de una reactivación de la actividad económica para preservar sus beneficios, lo que objetivamente atenta contra la salud del pueblo trabajador. En distintos sectores y en forma progresiva, el gobierno de Fernández deja correr a los lobbies empresariales, al mismo tiempo que rechaza destinar los recursos necesarios para apuntalar el sistema sanitario e impulsar testeos masivos, y rechaza reorientar una parte de la industria a la producción de los insumos e instrumentales fundamentales para hacerle frente a la pandemia. Por el contrario, el gobierno de Fernández reafirma la política que postuló desde el día que asumió: subordinar todo a la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y los organismos de créditos internacionales, sin cuestionar el carácter "odioso" y fraudulento de esa deuda. Ese plan de reestructuración de la deuda fue votada en el Congreso con la sola oposición de los diputados del Frente de Izquierda (...)

(...) el desembarco de la pandemia en la Argentina encontró al sistema sanitario público con un presupuesto congelado, heredado del gobierno de Mauricio Macri y de todos los gobiernos peronistas anteriores. Las consecuencias de este desfinanciamiento se revelaron rápidamente: Argentina tiene hoy la proporción de personal de salud



infectado por Covid-19 más alta del mundo en relación al conjunto de los infectados. Los capitalistas, por su parte, descargan su crisis sobre las espaldas de los trabajadores, con decenas de miles de despidos y suspensiones y violentas reducciones salariales. Las burocracias sindicales, lejos de defender las conquistas de los trabajadores, se anotan como voceros y representantes de sus respectivas patronales, rubricando los ataques de las patronales contra los derechos laborales. Y el gobierno, a la vez que permite el alza de despidos, suspensiones y rebajas salariales, premia a las empresas con subsidios estatales para que afronten parte del pago de salarios, en lugar de que utilicen sus fabulosas ganancias obtenidas en años anteriores. (...)

La pandemia ha puesto en evidencia el carácter criminal de la política capitalista de los distintos gobiernos del mundo.

(...) Los trabajadores de la salud, en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, se encuentran a su vez liderando la lucha contra los vaciamientos sanitarios de los gobiernos capitalistas, protagonizando todo tipo de denuncias, asambleas, abrazos a hospitales y otras acciones posibles en el marco de la pandemia (...)

A su vez, los trabajadores y los pueblos del mundo no ingresan a la presente crisis como una "hoja en blanco". El 2019 ha sido un año signado por la irrupción del proletariado en importantes metrópolis por la emergencia de grandes rebeliones populares (...)

La pandemia ha impuesto un relativo cuadro de contención de estas enormes luchas y alzamientos de las masas, pero de ninguna manera esos procesos se han cerrado, pues todas las contra-

diciones sociales que motivaron esos estallidos, lejos de haberse disipado, se han agudizado (...)

(...) la defensa de la independencia política de los trabajadores en las batallas actuales y venideras, en oposición a la política funesta de la colaboración de clases, será fundamental para llevar las luchas obreras y populares a la victoria y para zanjar el camino que lleve, finalmente, a los trabajadores al poder. (...)

-Que la crisis la paguen los capitalistas, los bancos, multinacionales y grandes empresarios, no el pueblo trabajador. Plata para los hospitales y los profesionales y trabajadores de la salud. Testeos masivos para poder determinar la real propagación de la pandemia. Por una cuarentena sin despidos, suspensiones y rebajas salariales. Por un inmediato Fondo de Emergencia para destinar las partidas necesarias a combatir la mayor crisis del coronavirus en base a un impuesto especial y progresivo a todas las grandes riquezas, bancos, patrimonios y dueños de la tierra y el no pago de toda la deuda externa.

-Abajo los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Pago de los jornales íntegros por las patronales. Reparto de las horas de trabajo sin reducir salarios. Apertura de sus libros contables. Licencias pagas al 100% de todo sector productivo no esencial para enfrentar la pandemia. Obligatoriedad de empresas a reconvertirse para producir insumos necesarios frente a la pandemia. Comisiones de las y los trabajadores de control de las normas de la salubridad. Subsidio otorgado por simple inscripción a todo trabajador desocupado o precarizado, igual a la duplicación de los salarios mínimos vigentes. Aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales.

-Triplicación inmediata de los presupuestos de salud para dotar de respiradores, medicinas, tomar más médicos y enfermeras, habilitar salas y camas y reactivos que puedan diagnosticar el coronavirus, entre otras tantas demandas que el personal está levantando. Constitución de comités de crisis o emergencia elegidos e integrados por trabajadores hospitalarios, con derecho a veto, para garantizar la bioseguridad del personal hospitalario y diseñar la política de intervención. Distribución gratuita de alcohol en gel, desinfectantes, barbijos y toda medicina necesaria para combatir el virus pandémico.

-Unificación y centralización del sistema de salud a nivel nacional, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la universidad, bajo control de los trabajadores y profesionales. Implementación de comités de emergencia (o crisis) central y locales, con participación de lxs trabajadorxs.

-Control popular de precios de los alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos. Apertura de los libros de contabilidad de las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos y medicamentos. Abajo la especulación capitalista con la comida y los remedios. Castigo a los monopolios formadores de precios. Incautación, clausura y detención de los responsables.

-No a los desalojos de viviendas. Congelamiento de alquileres y no pago de los mismos mientras dure la pandemia. Compensación a los pequeños propietarios de hasta dos viviendas. Censo de viviendas ociosas y ocupación de emergencia de las mismas a ciudadanos sin vivienda o familias hacinadas (villas, etc.) que es donde más rápidamente se puede extender el contagio de la pandemia, comenzando por las personas integrantes de los grupos más vulnerables (adultos mayores, enfermedades preexistentes, etc.).

-Presupuesto de emergencia en violencia de género, para atender en forma urgente y con lugares acordados para la asistencia y resguardo de las víctimas, frente a los aumentos de casos de violencia y el crecimiento de femicidios en el marco de la pandemia.

-No al uso del coronavirus para medidas de militarización o coartar el derecho a la protesta. Defensa irrestricta de las libertades democráticas. Libertad a todos los presos políticos y a los detenidos durante el

transcurso de la pandemia. Derogación de decretos y leyes que viabilizan la represión. Derogación de los toques de queda. No al ciberpatrullaje. Plenos derechos a la actividad sindical y reivindicativa y a manifestarse políticamente. Apertura obligatoria de los medios de prensa a todas las expresiones políticas para debatir las políticas con qué afrontar las pandemias. No al gobierno por decreto y el cierre del Congreso: que sesione y se pongan todos los proyectos del FIT-U a la discusión pública.

-Abajo las reformas laborales y previsionales reaccionarias y antiobreras. Nacionalización de todos los regímenes de jubilación privada, bajo control de los trabajadores activos y jubilados. Fuera la burocracia sindical entregadora de los derechos laborales.

-Desconocimiento soberano y no al pago de las deudas externas. Ninguna renegociación para pagar como está haciendo el gobierno del Frente de Todos en Argentina. Plata para salud, los hospitales y el pueblo trabajador, no para los usureros de la deuda. Ruptura inmediata de los pactos económicos y políticos que nos atan al imperialismo. Fuera el FMI de Argentina y de América Latina.

-Nacionalización sin pago de indemnización y bajo control obrero de los sistemas bancarios y los mercados de cambios para impedir la fuga de capitales y centralizar los ahorros nacionales, para impulsar planes de desarrollo al servicio del pueblo trabajador. Nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de los hidrocarburos, la minería y de todos los recursos estratégicos, así como de las empresas de luz y gas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

-Convocamos a la más amplia unidad de acción de las organizaciones obreras, populares, juveniles, del movimiento de mujeres y en defensa del ambiente para coordinar acciones nacionales y a nivel mundial para imponer medidas de fondo en la perspectiva de luchar por terminar con este sistema capitalista-imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora. Por la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina. Por el socialismo internacional.

Frente de Izquierda Unidad (Partido Obrero - PTS - Izquierda Socialista - MST)

La declaración completa está disponible en <https://prensaobrera.com/politicas/69473>